1° de marzo de 1998.

FRANCISCO LABASTIDA OCHOA
SECRETARIO DE GOBERNACION

1° DE MARZO DE 1998

MUY BUENAS TARDES:

El Presidente de la República me ha instruido informar a los mexicanos de la decisión que ha tomado para impulsar la solución del problema en el estado de Chiapas.

Han transcurrido cuatro años de conflicto. Durante ellos, el Gobierno Federal siempre ha buscado la solución política y pacífica del problema. Promulgó dos leyes –la de Amnistía y la del Diálogo- para poder negociar la paz con quienes le habían declarado la guerra al Gobierno y atacado al Ejército Mexicano. Para mostrar su buena disposición, el Gobierno también promovió, primero la liberación de tres de los dirigentes más connotados del EZLN; y después, la libertad de sus simpatizantes presos en Chiapas.

Se realizaron rondas de negociaciones y mesas de trabajo, se discutieron propuestas y se firmaron los Acuerdos de San Miguel y San Andrés Larráinzar. Se atrajo a la justicia federal el caso de la masacre de Acteal y se detuvieron y consignaron a más de 60 presuntos responsables. Se aumentó el gasto corriente y la inversión federal en Chiapas, más rápido que en cualquier estado de la República, para contratar más médicos, enfermeras y maestros; construir más escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua potable e impulsar la producción. Sin embargo, la negociación se encuentra estancada: el EZLN se niega a reanudar el diálogo y además estableció ilegalmente los llamados "municipios autónomos", que suplantan a los policías, encarcelan a quien difiere de ellos; extorsionan a la población, cobran ilegalmente impuestos y cuotas en los caminos.

En estas últimas semanas, le hicimos llegar al EZLN las cuatro observaciones del Gobierno al proyecto de reformas constitucionales de la COCOPA. La respuesta ha sido, de nueva cuenta, la negativa al diálogo.

Los mexicanos queremos la paz para todos y una mayor atención a las necesidades de los indígenas. El país y los indígenas no pueden ser rehenes de nadie. No es aceptable que el conflicto en Chiapas dificulte la marcha normal de la Nación. Con todo rigor, el día de ayer los chiapanecos se pronunciaron sobre ello. El Gobierno ha estado y está dispuesto a dialogar para alcanzar una solución del conflicto, lo más rápidamente posible; y cumplirá cabalmente los Acuerdos de San Andrés.

Hay una confusión creada intencionalmente sobre estos. Quiero explicarla.

El Gobierno firmó los Acuerdos de San Andrés obviamente para cumplirlos. El propio Presidente de la República ha dicho, en reiteradas ocasiones, que honrará ese compromiso. Ese no es el punto a discusión. Quien diga lo contrario falta a la verdad.

Se formuló un proyecto de reformas constitucionales por la COCOPA. Éste nunca fue aprobado por el Gobierno. Nunca nos comprometimos con él. No está firmado. Quien diga lo contrario falta a la verdad.

Lo que no ha quedado claro, es que esos acuerdos tienen que transformarse en reformas a nuestra Ley suprema: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reconocemos el esfuerzo de los integrantes de la COCOPA para traducir los Acuerdos de San Andrés a normas constitucionales. Estamos de acuerdo con la mayoría del documento.

Las cuatro observaciones que hace el Gobierno están basadas en la razón profunda de la unidad de los mexicanos. Dichas observaciones las estamos entregando en este día a todos los medios de comunicación para que por su conducto las conozcan los mexicanos. No tenemos nada que ocultar.

Se acusa al Gobierno de negarse a aceptar los derechos de los indígenas. Esto es falso. Quienes han acusado al Gobierno de negarse a aceptar los derechos indígenas, no sólo han faltado a la verdad, han actuado de mala fe.

La primera observación se refiere a la libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas. El Gobierno está de acuerdo con ello, pero tal como lo expresan los Acuerdos de San Andrés. Es decir incluyendo la obligación de:

- * Fortalecer la soberanía nacional.
- * Contribuir a la unidad y democratización de la vida nacional.
- * Respetar a los tres niveles de Gobierno.

El proyecto de reformas constitucionales de la COCOPA excluye estos principios.

Así como el Gobierno de una entidad federativa no puede romper relaciones con ninguna nación extranjera, ni cobrar impuestos al comercio exterior, porque son facultades exclusivas de la Federación; así la autonomía de las comunidades indígenas tiene que definirse con precisión en su contenido y alcance. Eso está determinado con claridad en los Acuerdos de San Andrés y queremos que se respete.

La segunda observación es sobre el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades de conformidad con sus usos y costumbres. El Gobierno está desde luego de acuerdo con ello, pero agrega, como lo señalan los Acuerdos de San Andrés, que con pleno respeto al Municipio. Si no lo establecieran así, con toda claridad, habría dos o más autoridades; se provocarían conflictos sobre quién le ordena a la policía; quién cobra los impuestos, entre otros problemas. Es decir, se podrían generar graves conflictos en cientos de municipios.

La tercera observación se refiere a la explotación colectiva de los recursos naturales, particularmente de la tierra, por las comunidades indígenas. El Gobierno por supuesto que no se opone a la explotación colectiva de la tierra. Está consagrada en el artículo 27 Constitucional. Se opone, eso sí, a que una redacción ambigua dé lugar a que la propiedad ejidal y privada que existe en las regiones con mayoría de población indígena, sea sólo explotada colectivamente. Esto puede abrir, en muchos estados del país, de nueva cuenta, el conflicto de tenencia de la tierra y crearía conflictos que derramarían la sangre de muchos mexicanos.

Asimismo se refiere al derecho de las comunidades indígenas para tener sus propios medios de comunicación. También estamos de acuerdo con ello; pero no con una redacción que conduzca al incumplimiento de las leyes en la materia. Esto generaría un caos en la radio y televisión, sector vital para cualquier país.

La obligación del Gobierno con los indígenas de Chiapas y de todo el país está vigente. No está condicionada ni depende de la aprobación de un grupo. Sostenemos que el proyecto de reforma constitucional debe establecer un nuevo pacto social con los indígenas de todo el país.

En estos términos, el Gobierno convoca a la COCOPA, en la que participan legisladores de todos los partidos, a evaluar las cuatro observaciones y elaborar conjuntamente el proyecto de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena que sean la fiel traducción jurídica de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Proponemos que la razón, la verdad y los supremos intereses del país sean la única luz que nos guíe.

Ésta será la base para que el H. Congreso de la Unión conozca y debata, y en su caso apruebe, la iniciativa de reformas constitucionales que le presentará el Ejecutivo de la Unión, en el próximo período ordinario de sesiones.

El Gobierno ha cumplido y cumplirá su palabra. Lo hará, con una iniciativa que les cumpla a las comunidades indígenas de todo México y garantice la unidad nacional y la vigencia del orden constitucional. Lo hará, tomando en cuenta el trabajo ya avanzado por la COCOPA en su proyecto. Lo hará, para sentar las bases del nuevo pacto social con las comunidades indígenas. Lo hará, para asegurar que las normas constitucionales sean claras y congruentes, de forma tal que ello también asegure a las comunidades la facilidad de su aplicación.

Adicionalmente, el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno y Congreso del Estado de Chiapas y sus autoridades municipales, reforzará los programas sociales de atención a la marginación y la pobreza y propondrá medidas que promuevan la inversión privada en las zonas rurales y urbanas de Chiapas, con el objeto de generar empleo, y dotar de más y mejores fuentes de ingreso estable a su población.

Señoras, Señores:

Ya es tiempo de concluir un conflicto que desgasta y lastima a la Nación.

Ya basta de entorpecer el esfuerzo para superar la marginación y pobreza que padecen la mayoría de los indígenas del país.

Ya basta que haya tanta pobreza en Chiapas, teniendo recursos naturales de tan extraordinaria riqueza.

Concluamos el conflicto. Los mexicanos queremos tranquilidad, paz, democracia y desarrollo con justicia.

Muchas gracias por su atención, buenas tardes.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE PROPONE EL SIGUIENTE

PUNTO DE ACUERDO

ESTA COMISIÓN PERMANENTE, REITERA SU MÁS DECIDIDO APOYO A LA COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN EN SUS FUNCIONES DE COADYUVANCIA. EN CONSECUENCIA:

ÚNICO: SOLICITA A ESE CUERPO COLEGIADO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, INTENSIFICAR SU TRABAJO PARA BUSCAR UNA APROXIMACIÓN ENTRE LAS FUERZAS POLÍTICAS DEL PAÍS QUE COADYUVE A LA SOLUCIÓN PACÍFICA DEL CONFLICTO. IGUALMENTE, LE EXHORTA A FORTALECER LA INTERLOCUCIÓN CON Y ENTRE LAS PARTES DIRECTAMENTE INVOLUCRADAS. LE SOLICITA TAMBIÉN INCREMENTE SUS GESTIONES PARA PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DIEZ PUNTOS DEL PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO COCOPA-CONAI.

Salón Legisladores de la República, a los 4 días del mes de marzo de 1998.

Rodolfo Aguilar
Rosendo Alvarado
Alfonso Ramírez
Mario Saucedo
Francisco J. Paoli
Sancho Sánchez
Antonio
Richard Cantú Garza
Pablo López
Verónica Velasco
Alfonso Ramírez
Mario Saucedo
Antonio
Richard Cantú Garza
Pablo López
Verónica Velasco